Impacto Social: Igualdad de Género en el Proyecto de Mejora de los Servicios de Prevención y Atención al Delito en Barrios Vulnerables al Crimen y la Violencia en el Perú (PE-L1224)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Introducción**

En 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (GN-2531-6) para fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe (LAC) y para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer[[1]](#footnote-1). Además, en marzo de 2015, el Banco aprobó la Actualización de la Estrategia Institucional (AEI), que aborda los desafíos emergentes como la "Exclusión Social y la Desigualdad" y también identifica cuestiones transversales como "Igualdad de Género y Diversidad". La evidencia empírica ha demostrado que la igualdad de género[[2]](#footnote-2) contribuye a la reducción de la pobreza y genera mayores niveles de capital humano para las generaciones futuras[[3]](#footnote-3). La Política de Género compromete al BID a promover la igualdad de género en todos sus proyectos y trabajo analítico.

De manera similar, el Gobierno de Perú (GdP) reconoce la importancia de buscar la igualdad entre hombres y mujeres para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo, por la cual elaboró el “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021’’. Uno de los objetivos estratégicos de este plan es garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a la atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas agresoras. Su principal indicador en la matriz de planificación estratégica es el incrementar el porcentaje de mujeres afectadas por violencia física que acuden a una entidad pública a solicitar atención/ayuda.[[4]](#footnote-4) Este indicador se alinea con el indicador (R.3.2) en la matriz de resultado del presente préstamo. [[5]](#footnote-5)

En 2015, se aprobó la *Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (*Ley No. 30364). En el artículo 10, *Derecho a la Asistencia y la Protección Integrales*, la Policía Nacional del Perú (PNP) debe informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la PNP, debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia y de los servicios de atención que brinda el Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de esta obligación.

De la misma manera, bajo el articulo 15, *Denuncia*, cuando la PNP conozca de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado.

Por último, el artículo 42, *Registro Único de Víctimas y Agresores*, el Ministerio Público, en coordinación con la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), es el responsable del registro de casos de violencia contra las mujeres, en el que se consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios.

Sin embargo, es importante mencionar que en el Perú se aprobó recientemente, la *Ley de Protección de Datos Personales* (Ley LPDP No. 29733), la cual tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a los datos personales realizando un adecuado tratamiento a los mismos. Ello implica el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución del Perú, así como aquellas normas contempladas en la ley.[[6]](#footnote-6)

Por otro lado, El ministerio del Interior, en coordinación con la PNP y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), han trabajado conjuntamente para desarrollar los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM), los cuales brindan servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones. [[7]](#footnote-7)

Hasta el momento se cuenta con aproximadamente 245 CEM funcionando en comisarías a nivel nacional. Estas acciones vienen acompañadas de procesos de capacitación al personal policial encargado de la atención de las víctimas, por parte de los especialistas del MIMP.

En este contexto, el Proyecto de Mejora de los Servicios de Prevención y Atención al Delito en Barrios Vulnerables al Crimen y la Violencia en el Perú (PE-L1224) está siendo preparado por el BID con el objetivo de contribuir a mejorar la efectividad policial en la prevención del delito, mejorar la efectividad de la inteligencia policial y mejorar la prevención comunitaria. Mas aún, las actividades descritas en los componentes 1 y 3 del Proyecto contribuirán al incremento de las denuncias de violencia intra-familiar en las jurisdicciones intervenidas por le proyecto. Para este fin, se desarrollaran las siguientes actividades, i) diseñar e implementar una malla curricular moderna para la PNP con un enfoque de policía comunitaria[[8]](#footnote-8), la cual contiene módulos de formación para el apropiado abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual, ii) mejoramiento del sistema de información para una mejor recolección y análisis de datos, incluyendo los delitos por violencia intrafamiliar, iii) fortalecimiento de programas preventivos comunitarios dirigidos a las mujeres y, iv) adecuación de espacios físicos en la comisarias para proporcionar privacidad y confidencialidad a la hora de brindar los servicios de atención comunitaria. El tener una policía al servicio del ciudadano, favorecerá a mejorar la percepción ciudadana y la disposición de las mujeres víctimas de violencia a denunciar dichos delitos.

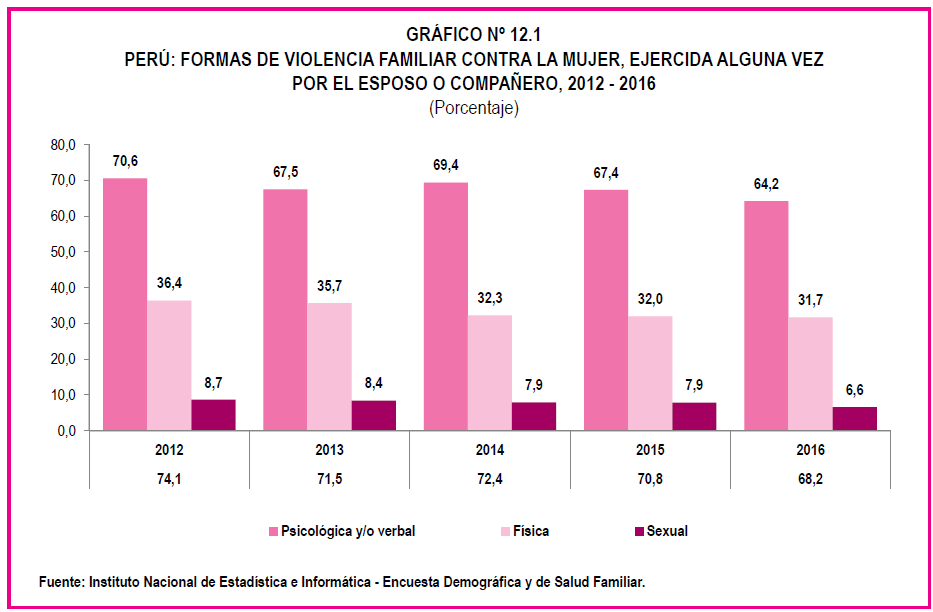
Este documento describe la importancia de abordar la violencia contra la mujer (VCM) en las operaciones de seguridad ciudadana y cómo se ha incorporado la igualdad de género a través de las actividades de los componentes 1 y 3 del Proyecto de Mejora de los Servicios de Prevención y Atención al Delito en Barrios Vulnerables al Crimen y la Violencia en el Perú.

**2. Violencia contra la Mujer (VCM)**

2.1 Datos de la VCM

En el año 2016, a nivel nacional, el 68,2% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de

violencia por parte del esposo o compañero. Entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica y/o verbal (64,2%), la violencia física (31,7%) y la violencia sexual (6,6%).



La violencia por parte del esposo o compañero fue mayor entre las mujeres divorciadas, separadas o

viudas (87,5%); asimismo, en aquellas mujeres con educación primaria (71,4%), residentes en la Sierra

(70,3%) y las que viven en hogares correspondientes al segundo quintil y quintil intermedio de riqueza

(71,5% y 70,9%, respectivamente).

A nivel nacional, las mujeres víctimas de violencia psicológica y/o verbal declararon haber sufrido alguna

situación de control (60,5%) por parte de su esposo o compañero, las más frecuentes fueron la insistencia

en saber a dónde va (43,5%) y la manifestación de celos (39,2%).

El mayor porcentaje de violencia psicológica y/o verbal ocurrió en las mujeres de 45 a 49 años de edad

(66,6%), en divorciadas, separadas o viudas (85,3%), con educación primaria (67,8%), residentes en la región Sierra (66,2%). De igual forma, las mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes, divorciadas, separadas o viudas), declararon que su actual o última pareja (esposo o compañero) había ejercido violencia física y/o sexual contra ellas (32,2%); el mayor porcentaje ocurrió en mujeres de 45 a 49 años de edad (39,3%), divorciadas, separadas o viudas (54,5%), residentes en el área urbana (33,1%), en la Sierra (35,4%), y las que viven en los hogares pertenecientes al segundo quintil y al quintil intermedio de riqueza (36,0% y 35,6% respectivamente).

En el país, el 10,8% de las mujeres alguna vez unidas, declararon que fueron víctimas de violencia

física y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en los últimos 12 meses anteriores a

la entrevista. El mayor porcentaje se presentó en las mujeres de 15 a 19 años de edad (17,6%), en las que

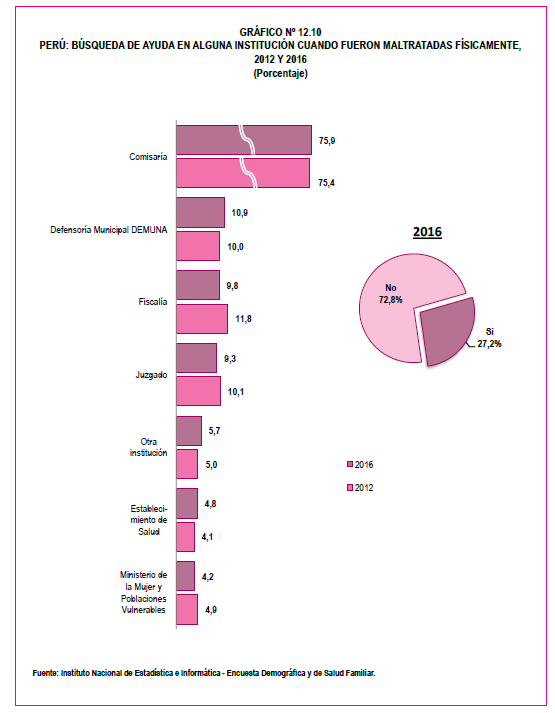
tienen educación secundaria (12,3%), pertenecientes al segundo quintil de riqueza (13,3%), residentes en la Sierra (12,7%).

La violencia de género basa sus raíces en razones de carácter cultural y social, que son consecuencia del rol particular que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia. Esto se ve reflejado en la relación de desigualdad entre hombres y mujeres manifestada en la tolerancia que existe por ambos sexos a la violencia contra la mujer. En el Perú, el 5.3% de las mujeres alguna vez casadas o unidas, considera aceptable pegar a la esposa por al menos una razón. La circunstancia más común por la cual las mujeres decían que pegar a la esposa era aceptable es por descuidar a los niños o a la casa (3.5%), seguido por salir sin su permiso (1.8%), quema la comida (1.4%), discute o discrepa con el esposo (1.3%), y por último, se niega a tener relaciones sexuales (1.1%). [[9]](#footnote-9)

2.2 Denuncias del maltrato.

En mayor porcentaje, las mujeres que experimentaron violencia física recurrieran sólo a personas cercanas (44,1%), buscaron ayuda o soporte con mayor frecuencia en la madre (35,7%); siguen amiga(o)/vecina(o) (19,2%), hermana (18,0%), entre otras personas.

Sin embargo, menos de la tercera parte (27,2%) de mujeres víctimas de violencia física buscó ayuda en alguna institución. De aquellas que acudieron a una institución, el 75,9% de mujeres busco ayuda en una comisaria, observándose una tendencia hacia el incremento en el período 2012/2016 (0,5 puntos porcentuales). También recurrieron a la Defensoría Municipal - DEMUNA y la Fiscalía en menores porcentajes que el mencionado (10,9% y 9,8%, respectivamente).



2.3 Razones por las cuales no buscaron ayuda cuando fueron maltratadas físicamente.

En el año 2016, entre las razones más frecuentes para no buscar ayuda, mencionaron que no era necesario

(44,5%), que sentían vergüenza (16,0%) y que no sabía dónde ir/no conoce servicios (11,6%), entre otras

razones. Otro factor importante que contribuye a las razones por las cuales las mujeres víctimas de violencia no buscan ayuda en las instituciones, es la baja credibilidad y confianza en la PNP. A pesar de que las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en 72% llegando a 164.488 en el 2016[[10]](#footnote-10), en ese mismo año, el 65% de los peruanos y las peruanas a nivel nacional revelan un sentimiento de desconfianza hacia la policía, un sentimiento de confianza de 28% y no opinan 7%. En la capital, el 27% de los consultados confía en la PNP y un 7% decide no opinar sobre ello. Otros sentimientos que genera la PNP en la población son temor (47% en el país y 52% en Lima), y vergüenza (51% en el país y 54% en la capital).[[11]](#footnote-11)

De acuerdo al último sondeo de *World Value Survey[[12]](#footnote-12)* para el período 2010-2014 el ranking de países según confianza en la policía muestra que los 5 países con menos confianza son: México, Trinidad y Tobago, Perú, Argentina y Pakistán. Es decir, 4 de los 5 países de los 60 incluidos en la muestra que tienen menor confianza en la policía están en la región.

**3. Igualdad de género dentro de los Componentes del Proyecto.**

3.1 Componente 1: Mejora la efectividad policial en la prevención del delito

El objetivo del primer componente de la operación es mejorar la efectividad policial en la prevención del delito. La operación fortalecerá las capacidades de los oficiales al diseñar e implementar una malla curricular moderna con un enfoque de policía comunitario. El enfoque de policía comunitario permite generar lazos solidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la reactiva, y el respeto por los derechos humanos.[[13]](#footnote-13) El préstamo ayudará a desarrollar el contenido de los módulos y cursos preestablecidos en la malla curricular, así como también, definir el perfil y las competencias necesarias para que la policía tenga un enfoque comunitario.

La malla curricular para la formación de oficiales y suboficiales con enfoque comunitario integra varios módulos que contienen cursos que ayudarán a mejorar la relación del policía con el ciudadano. Entre ellos se encuentran:

1. Relación con la Ciudadanía; el cual se centra en el abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual, negociación de conflictos sociales y atención y protección de familia y la trata de personas.
2. Derechos Humanos y Aplicación a la Ley; en donde se imparten cursos que incluyen temáticas como los derechos humanos aplicados a la función de la policía, derecho civil, derecho penal, ética y derechos, legislación de menores.[[14]](#footnote-14)

La aplicación de la nueva malla curricular permitirá un mejor entendimiento sobre la normativa legal y las medidas de protección en cuestiones de VCM, y además, proporcionará una atención con enfoque de derechos humanos, evitando así la revictimización de las mujeres. La revictimización es uno de los principales factores que incrementan la desconfianza en la PNP y no contribuyen a la disposición de las mujeres a denunciar este tipo de delito. Además, la capacitación adecuada al personal policial evitará la inacción y el abuso de autoridad por parte de los oficiales hacia las víctimas que están atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.

Actualmente, existe una baja formación, capacitación y especialización del personal de la PNP en el modelo comunitario. Casi el 100% de los egresados (oficiales y suboficiales) de la Escuela Nacional de Formación Policial (ENFPP) tuvieron un desempeño malo o regular en las competencias relacionadas con policía comunitario en las ultimas evaluación.[[15]](#footnote-15) De igual manera, esto implica una mala o regular formación en el abordaje y tratamiento a las víctimas de violencia familiar y sexual por parte de la PNP.

Además, la ENFPP no cuenta con una malla curricular estructurada con enfoque en policía comunitario, que desarrolle las competencias para prevenir delitos y construir vinculo de confianza con la comunidad.[[16]](#footnote-16) Así mismo, entre el 2012 y 2014, solo 120 oficiales y suboficiales de la PNP recibieron algún tipo de capacitación en policía comunitario.[[17]](#footnote-17) En un análisis reciente sobre las competencias en la ENFPP, reveló que tan solo entre el 37% y 44% de los créditos de la capacitación para la policía, se vinculan con el plan de estudio básico para la formación de policía comunitario. [[18]](#footnote-18)

Por otro lado, la operación fortalecerá la capacidad técnica y tecnológica para generar, gestionar y analizar la información criminal y poder planificar acciones locales de prevención del delito. En este sentido, esta actividad mejorará el sistema de gestión del conocimiento, al crear un único repositorio de datos que albergue e interconecte los datos de varias agencias del estado; el MININTER, el MIMP, el Ministerio Publico y la PNP.[[19]](#footnote-19) Se espera que la PNP tenga mejores habilidades para analizar adecuadamente los casos de denuncias por violencia contra la mujer, y que desarrolle las herramientas necesarias para prevenir la escalada de la violencia a tiempo. Además, al mejorar el perfil analítico de la policía se podrá definir las líneas de acción y enfatizar por donde es que se tiene que trabajar.

La confidencialidad de los datos personales de las víctimas y de los agresores se encuentra protegida bajo la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley No. 29733), por lo que se mitigará cualquier uso ilegitimo de la información que pueda poner en peligro a las personas cuya información este registrada en la base de datos de las comisarías. Actualmente, en muchas de las comisarias, los registros de delitos son efectuados en papel, lo cual puede estar sujeta a errores de interpretación, consolidación y bajas medidas de confidencialidad de los datos. Por otro lado, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) no esta siendo optimizado ya que no cuenta con interconectividad con otros sistemas informáticos disponibles en comisarías. [[20]](#footnote-20)

3.2 Componente 3: Mejorar la prevención comunitaria.

El objetivo del tercer componente es mejorar la prevención comunitaria. Este componente esta orientado a fortalecer los servicios de atención y los programas de participación comunitaria, y la prevención social de la violencia. En particular ese componente contempla tres actividades relevantes para el presente documento.

Por un lado, se busca el fortalecimiento de programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para abordar los factores sociales de riesgo y los roles tradicionales de género, que, bajo un sistema patriarcal, sitúan a la mujer en una posición de desventaja, propensa a experimentar violencia. Estas faltas se encuentran asociadas a los modos y acuerdos tácitos que la estructura de la sociedad ha puesto, pues “los estereotipos de género refuerzan la noción del ‘derecho’ del marido a controlar a su compañera, y ejercer tal control mediante la violencia”. [[21]](#footnote-21) Una de las intervenciones contempladas por el proyecto, es de implementar programas que aborden el tema de masculinidades en los distritos seleccionados como medida de prevención hacia el maltrato de las mujeres.[[22]](#footnote-22)

Además, el proyecto busca mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Este mecanismo permitirá amenorar el uso ilegitimo de poder, y el abuso de las autoridades contra los ciudadanos o contra poblaciones vulnerables. El MININTER y la PNP no cuentan con un sistema de información o portal para proveer acceso a la información pública; garantizar la transparencia en las labores de la institución; y realizar un adecuado control interno.[[23]](#footnote-23)

Por último, el proyecto adecuará espacios físicos en comisarias para los servicios de prevención comunitaria como oficina de participación ciudadana, sala multiusos, sección de familia en donde se prevé recibir y atender los casos de violencia intra-familiar. Este ultimo espacio permitirá ofrecerle a la víctima el debido respeto, con la correspondiente privacidad y confidencialidad, requisitos de una adecuada atención de calidad.[[24]](#footnote-24) De las 107 comisarías en el área de intervención, 89 disponen de áreas de información al público, 78 con salas de espera y 22 cuentan con un módulo de atención ciudadana. Lo cual afecta la participación de los ciudadanos en programas de prevención como las Juntas Vecinales en las que participa solo el 4,47% y en las Brigadas de Autoprotección participa el 0,23%.

**4. Plan de acción para las medidas de mitigación**

La operación ha incorporado varias de las recomendaciones establecidas por la Nota Sectorial de Seguridad Ciudadana, Leyes y Justicia.[[25]](#footnote-25)

4.1 A nivel sectorial

El personal del sector judicial y de las fuerzas del orden frecuentemente carece del conocimiento y la capacidad para responder de manera adecuada a las sobrevivientes de la violencia. Además, es posible que este personal comparta con la sociedad valores que condonan la violencia contra las mujeres y las niñas, llevándolo a culparlas o a exhibir actitudes y tomar decisiones discriminatorias. Por ese motivo, además de establecer respuestas definidas a la VCMN y servicios de apoyo especializado para las sobrevivientes, es fundamental ofrecer constantemente capacitación e intervencionesde sensibilización para el personal a todos los niveles o también una curricula nueva que atienda estos desafíos.

4.2 Por procedimientos y protocolos

Sistematizar y reforzar la recolección de datos sobre delitos relacionados con la VCM. Para mejorar la tramitación, el análisis y el seguimiento de los casos penales que se relacionan con la VCM, las distintas instituciones involucradas en la obtención de justicia y la aplicación de la ley deben disponer de un registro de casos y un sistema de seguimiento confiables con datos de alta calidad. Por ejemplo, datos de incidencia, prevalencia y tipos de delito violento estén desagregados por sexo, edad y ubicación.

4.3 Estructura y capacidad institucionales

Establezca dependencias exclusivas o estaciones de policía especializadas. Las estaciones especializadas o las dependencias exclusivas con personal capacitado pueden estar en mejores condiciones de prestar servicios centrados en la sobreviviente, obtener las declaraciones de las sobrevivientes sin revictimizarlas y facilitar la recopilación de la evidencia. En este proyecto adecuará espacios especiales en las comisarías para brindar más privacidad y confidencialidad a las víctimas de violencia, requisitos indispensables de una atención de calidad.

El plan de acción debe implementarse durante la ejecución de la operación, y cada una de las medidas de mitigación descritas deberían formar parte de las condiciones contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo de la operación. Estas medidas y su inclusión en el Contrato de Préstamo serán descrito con mayor detalle en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) que se preparará para la Operación como un enlace obligatorio.

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Medidas de mitigación |
| Violencia o ejercicio de poder no legitimo de parte de la policía  Revictimización a las víctimas de violencia contra la mujer que deciden reportarlo | Capacitaciones de ética, incluyendo módulos sobre género, violencia de género y cómo responder efectivamente, diversidad y la no‑discriminación, y derechos humanos, siguiendo estándares internacionales  Enfoque de la curricula de policía comunitario desde la Escuela de la Policía (Componente 1).  Además, se adecuarán espacios especiales en las comisarías para brindar una atención de calidad; privacidad y confidencialidad a la víctima cuando se realice la denuncia (componente 3). |
| Uso ilegítimo de poder o abuso de las autoridades contra ciudadanos o contra poblaciones vulnerables | Desarrollo de un mecanismo de atención de quejas y reclamos como está previsto en el Componente 3: Mejoramiento de Mecanismos de Rendición de Cuentas, Transparencia y Participación Ciudadana. |

**5. El Plan de Consulta Pública**

La Política de medioambiente y cumplimiento de salvaguardias (OP-703) del Banco Interamericano de Desarrollo Directiva B.6 sobre Consultas afirma que operaciones clasificadas bajo Categoría B, requerirá consultas con las partes afectadas al menos una vez, durante la preparación del análisis de impacto o riesgo y el correspondiente plan de mitigación, y en acuerdo con el Prestatario. Con los propósitos de la consulta, información apropiada será disponible en los sitios, formatos, e idiomas apropiados para permitir que las partes afectadas sean consultadas de una manera significativa, para formar una opinión y para comentar sobre las actividades propuestas …. Análisis relevante se dispondrá al público consistente con la Política de Acceso a la Informacion del BID (OP-102). Durante la ejecución, las partes afectadas deben ser informadas de las medidas de mitigación ambiental y social que les afecten…” 20

Ya que esta operación fue clasificada por la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESG) como Categoría B como consecuencia de la Reunión de Revisión de Elegibilidad del XXXX, se requerirá una consulta de acuerdo a la OP-703 B.6 y divulgado el informe de la consulta al público, antes de la distribución de los documentos de proyecto al Comité de Políticas Operativas (OPC).

Por lo tanto, la consulta pública se llevará a cabo en Lima en proporción a la magnitud de la operación que difunde y revela el presente documento de análisis social y de género en forma de comunicación más accesible para el contexto sociocultural en el que se llevará a cabo la operación.

Existen algunas pautas generales sobre la logística y el formato de la consulta, como por ejemplo anunciar una reunión pública en un centro comunitario junto a la disponibilidad de este documento. Se deben hacer esfuerzos para asegurar la inclusión de mujeres, jóvenes, personas mayores, discapacitadas o de otra manera vulnerables (seleccione un lugar para la reunión que sea accesible para discapacitados, durante un período de tiempo que sea factible para hombres y mujeres). Si es posible, proporcione en el anuncio de la reunión un correo electrónico o una dirección postal para permitir la presentación de comentarios o preguntas por escrito como una forma alternativa de participación para promover la inclusión de todas las partes que deseen ser incluidas pero que no puedan asistir o deseen compartir sus puntos de vista abiertamente en la reunión publica.

La consulta debe esforzarse por la representatividad, lo que significa que, aunque no es posible contar con la participación de todas las personas, intereses, géneros, edades y grupos socioeconómicos, hay una selección de individuos de cada grupo que pueden reflejar las preocupaciones únicas y perspectivas de cada uno. La inclusión de grupos de la comunidad local, iglesias o grupos religiosos, organizaciones o asociaciones en la comunidad es importante.

El alcance de la reunión debe abarcar las actividades propuestas de la operación, el presente documento sobre igualdad de género y medidas de riesgo y mitigación, e incluir el tiempo suficiente para escuchar las opiniones, perspectivas y sugerencias de los participantes de la reunión. Los comentarios y respuestas proporcionados a los participantes deben registrarse, junto con los nombres, edades y géneros de todos los participantes. Al concluir la reunión, los participantes deben ser informados de qué acciones se tomarán a continuación en términos del avance del proyecto y cómo se pueden tomar sus comentarios en cuenta (en la medida de lo posible y teniendo cuidado de no prometer respuestas o acciones si no están seguros de tener lugar), y una forma de comunicación que será accesible en caso de que los participantes o cualquier otra persona desee expresar sus inquietudes o preguntar preguntas en el futuro con respecto al proyecto.

**Anexo 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Formación de los suboficiales** | |
| Prevención | Patrullaje Policial |
| - Técnicas y Procedimientos de Seguridad Ciudadana para el trabajo conjunto con las Juntas Vecinales y el Serenazgo Municipal |
| Relación con la ciudadanía | Abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual |
| - Oratoria |
| Cultura física, defensa personal y manejo de armas | - Cultura Física I, II, III, IV, V |
| - Defensa Personal I, II, III |
| - Uso y Manejo de Armas de Fuego I, II, III |
| Actitud | - Seguridad Ciudadana |
| - Seguridad Comunitaria |
| - Orden Abierto |
| - Orden Público |
| - Delitos Contra el Orden Publico |
| - Mantenimiento del Orden Público |
| - Accionar de la PNP en el control del Orden Público |
| - Accionar de la PNP en la Seguridad Ciudadana. |
| - Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 -2018 |
| - Deontología Policial |
| - Liderazgo y Transparencia |
| Derechos humanos y aplicación de la ley | - Ética y DD.HH I, II |
| - Derechos Humanos aplicados a la Función Policial I, II |
| - Derecho Constitucional |
| - Derecho Civil |
| - Derecho de Policía |
| - Derecho Penal I, II |
| - Nuevo Código Procesal Penal I, II |
| - Código de Justicia Militar Policial |
| - Código del Niño y Adolescentes |
| - Legislación Policial I, II |
| **Formación de Oficiales** | |
| Actitud | - Seguridad Ciudadana |
| - Orden Público |
| - Seguridad de Establecimientos Públicos y Privados |
| - Análisis de Riesgos y Estudios de Seguridad |
| - Ética y Deontología Policial |
| - Ética, Liderazgo y Transparencia |
| - Liderazgo Policial |
| - Turismo y Medio Ambiente |
| Relación con la ciudadanía | - Negociación de Conflictos Sociales |
| - Atención y Protección de Familia y Trata de Personas |
| - Abordaje a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual |
| - Oratoria |
| Prevención | - Patrullaje Policial |
| - Procedimientos Policiales de Prevención |
| Cultura física, defensa personal y manejo de armas | - Cultura Física I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX |
| - Defensa Personal I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX |
| - Uso y Manejo de Armas de Fuego I, II, III, IV |
| Derechos humanos y aplicación de la ley | - Derechos Humanos |
| - Derecho de Policía |
| - Derecho Constitucional |
| - Derecho Civil |
| - Derecho Administrativo |
| - Derecho Penal I, II |
| - Derecho Procesal Penal I, II |
| - Legislación de Menores |
| - Legislación Policial |
| - Código Penal Militar Policial |

1. Todos los países miembros de la región respaldaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (1994), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). [↑](#footnote-ref-1)
2. Cuando las mujeres y los hombres disfrutan de las mismas condiciones y oportunidades para ejercer sus derechos y alcanzar su potencial social, económico, político y cultural. La búsqueda de la igualdad requiere acciones dirigidas a la equidad, lo que implica proporcionar y distribuir beneficios y / o recursos de una manera que reduzca las brechas existentes, a la vez que reconoce que estas brechas pueden dañar tanto a mujeres como a hombres. [↑](#footnote-ref-2)
3. Banco Mundial 2007. Informe de Seguimiento Mundial 2007: Enfrentando los Desafíos de la Igualdad de Género y Estados Frágiles, citado en GN-2531-6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Plan Nacional Contra la Violencia de Genero 2016-2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. Propuesta de Desarrollo de la Operación, Matriz de Resultados, PE-L1224. [↑](#footnote-ref-5)
6. “datos personales” a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable y a “bancos de datos personales” como el conjunto organizado de datos personales, independientemente del soporte y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso.  [↑](#footnote-ref-6)
7. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, https://www.mimp.gob.pe/ [↑](#footnote-ref-7)
8. El modelo de policía comunitaria, definido por la PNP, hace referencia a una policía próxima a la ciudadanía, con recursos concentrados en sus comisarías, para atender mejor las demandas de seguridad. Incluye: (i) actividades preventivas dentro de un área geográfica reducida; (ii) relaciones estrechas con la comunidad; (iii) esfuerzos por movilizar a la comunidad para desarrollar acciones preventivas conjuntas; y (iv) estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia, incluyendo su análisis estadístico. Fuente: Diagnóstico Perfil de Inversión Pública Barrio Seguro, Trans100d, 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fuente: Violencia Contra las Mujeres en América Latina y el Caribe; Análisis Comparativo de Datos Poblacionales de 12 Países. Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012). [↑](#footnote-ref-9)
10. Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, 2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ipsos Peru, 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. # [¿Es la falta de confianza en las policías en América Latina y el Caribe una anomalía?](https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2016/04/28/confianza-en-policias/), Blog Sin Miedos https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2016/04/28/confianza-en-policias/

    [↑](#footnote-ref-12)
13. USAID, 2012 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ver anexo con la table que contiene los cursos relacionados a policía comunitario [↑](#footnote-ref-14)
15. MININTER-ENFPP. 2017 [↑](#footnote-ref-15)
16. Inseguridad en el Perú. ¿Que Hacer? Costa y Romero 2011 [↑](#footnote-ref-16)
17. Diagnostico Perfil de inversión Publica Barrio Seguro,Trans 100d,2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Encuesta Barrio Seguro, 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Entrevista con Mariana Llona, Directora de Información del Ministerio del Interior. [↑](#footnote-ref-19)
20. CENACOM, 2016. [↑](#footnote-ref-20)
21. Informe de estudio: Familia, Roles de Género y Violencia de Genero, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. Masculinidades: por el rol particular y las exigencias sociales asociadas con el ejercicio del poder, a los hombres se les exige ser fuertes, osados, conquistadores, estas “características” incrementan los riesgos de accidentes, violencia, enfermedades de transmisión sexual, etc. [↑](#footnote-ref-22)
23. De acuerdo con el Informe de la Defensoría del Pueblo, “Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú: Cinco áreas de atención urgente” (2009), [↑](#footnote-ref-23)
24. Reglamento de Decreto legislativo No. 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Artículo 4.- Funciones. Garantizar los   derechos   fundamentales de las personas y la protección de sus bienes, privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y en abandono moral y material, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones. [↑](#footnote-ref-24)
25. La Violencia contra las Muejres y las Niñas: Nota Sectorial de Seguridad Ciudadana, Leyes y Justicia. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Global Women’s Institute, 2015. [↑](#footnote-ref-25)